

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades*

Luis Ignacio Román Morales

Indignarse frente al empobrecimiento, la creciente concentración del ingreso o la expansión del empleo precario e inestable, es naturalmente humano. En la reflexión ética, la recurrencia al discurso sobre la justicia y la equidad es tan importante como la referencia a la democracia o a la libertad.

Sin embargo, los conceptos anteriores se utilizan frecuentemente sin que los propósitos puedan traducirse en prácticas reales. A veces parecería que la reducción de la pobreza, la redistribución del ingreso o la elevación en la calidad del empleo, pertenecen al reino de la utopía, aunque el bienestar social sea el fin último de las teorías económicas y sociales, de la acción pública o de la movilización social. Parecería también que existe oposición entre buscar la equidad y la eficiencia (aunque conceptualmente son complementarios), que la competitividad no deja lugar a la cooperación y que la llamada racionalidad económica no le permite al individuo salir de los parámetros cartesianos que le impone la internacionalización del capital, del dinero y del comercio.

Lo anterior conduce a múltiples restricciones en el paso entre los grandes propósitos sociales y el diseño de propuestas para alcanzarlos. El diagnóstico mismo de los deterioros sociales puede atribuirse a hechos específicos, como la corrupción o la falta de voluntad de las autoridades. De ser así, todo lo que se requeriría sería un gobierno honesto y trabajador, en cuyo caso la definición de políticas económicas sería secundaria, pero... ¿si tuviéramos un gobierno honesto y trabajador se resolverían de manera automática los problemas socioeconómicos del país? Seguramente que mucho se podría hacer, pero no por ello cambiarían las tendencias fundamentales ni las razones de fondo que han conducido a la

* Este artículo constituye una reformulación y actualización del publicado por el autor, véase Román Morales, 2003.

Análisis Político

complicación de los problemas sociales. El atribuir las causas de los problemas nacionales a la corrupción es una verdad que puede emplearse para ocultar otras verdades. La corrupción y la falta de voluntad lesionan a la sociedad, pero no son los únicos golpeadores. Al atribuir un solo origen a una situación social corremos el riesgo de magnificarlo y de hacerlo parecer invencible.

El conocimiento sobre las soluciones es una pretensión que no puede ser absoluta, porque los supuestos o los modelos en que se basan las propuestas parten de una cierta visión de la realidad. Ninguna propuesta puede ser neutra ni totalmente objetiva, se sitúa desde la propia ubicación de quien la propone ante la sociedad.

Evidentemente, más allá del conocimiento correcto o incorrecto que lleva a plantear una propuesta, su factibilidad no depende sólo de factores técnicos sino también políticos y sociales. Una propuesta puede tener una estructuración y una argumentación lógica, pero si no cuenta con base social o afecta intereses que no se pueden enfrentar, tal propuesta es, en principio, sólo una exposición de ideas. Esta restricción es mayor en la medida en que el poder esté concentrado y la capacidad para hacer contrapeso sea menor. De ahí la importancia de los juegos de poder real que están detrás de las iniciativas de políticas.

De manera inversa, el sustento de poder que exista detrás de una política tampoco asegura que ésta sea económicamente viable. Toda decisión económica genera efectos y contraefectos. Para evaluar sus posibles resultados cabría ubicar qué variables, qué sectores, qué regiones, qué grupos sociales puede favorecer y cuáles puede desfavorecer directamente, así como cuáles pueden ser los efectos indirectos de los favorecidos sobre los desfavorecidos y viceversa. Por ejemplo, una decisión de expropiar determinados bienes a los más ricos para distribuirlos entre los más pobres, evidentemente tendría un carácter beneficioso para estos últimos, pero si esto causa una parálisis en la inversión se podría producir un empobrecimiento aún mayor de los pobres. Esto no significa que no deban tomarse decisiones en favor de una mejor distribución del ingreso y una elevación del bienestar social (de

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

hecho es fundamental que se tomen decisiones en tal sentido), sino que éstas sean estudiadas de manera cuidadosa para que su objetivo se cumpla auténticamente.

El propósito de este artículo no cumple con tales condiciones de análisis técnico y político. De hecho, ello supera infinitamente lo que pueda hacer una persona o lo que se pueda plantear en un artículo. Entonces, cabe la pregunta: ¿si cuento con enormes deficiencias técnicas, de conocimientos teóricos y de análisis sobre aspectos fundamentales de la realidad, si se trata de un ejercicio que no parte de una base social o política de apoyo, si bajo las relaciones de poder existentes las modificaciones a las estrategias de desarrollo actuales parecen quiméricas, vale la pena plantear una propuesta de política alternativa?

El presentar este artículo implica una respuesta afirmativa, así como considerar que no es inútil exponer lo que se piensa, a pesar de tener la certeza de su corto alcance. Finalmente, la construcción de alternativas pretende la recuperación de la capacidad de influencia de sectores sociales, individuos e historias que sólo pueden lograr transformaciones escuchándose y actuando colectivamente. Si el fin último de la economía es el bienestar social (por lo cual hay que defender el estatus de la economía como ciencia social), el fin de este artículo es jugar a ser economista, discutir e invitar a la reflexión sobre aquellas decisiones públicas que, de manera eventual, puedan ser adecuadas a nuestras circunstancias y que, a la vez, operen en favor de los objetivos sociales que tan recurrentemente nos planteamos. En otras palabras, abordar el tema de las alternativas concretas implica entrar a participar en el juego de construcción de un puente entre lo justo y lo posible.

Las propuestas que se mencionan a continuación no son ideas acabadas ni recetarios. Las ideas socialmente factibles no pueden diseñarse sólo detrás desde un escritorio sin la participación de las vivencias sociales.

El esquema que desarrollaremos parte de la concepción general de la economía política en cuanto estudio de las esferas de producción, distribución, intercambio (mercado) y consumo de la riqueza. Actuar sobre la pobreza no es sólo

Análisis Político

enseñar a pescar en vez de dar el pescado, sino constatar que el lago, efectivamente, tenga peces y no se esté convirtiendo en un desierto. Para que la población pueda enfrentar la pobreza y elevar su calidad de vida, requiere: i) los medios a través de los cuales pueda generar riqueza; ii) un pacto social que le permita acceder en forma equitativa a la riqueza generada; iii) programas de mejoramiento de las condiciones del mercado, tanto en cuestiones de calidad y productividad, como de impedimento a la formación o la consolidación de estructuras oligopólicas; iv) programas de consumo universal de los bienes y servicios que sean considerados públicos (educación, salud, cultura, infraestructura básica, etc.), así como de consumo especial para la población marginada (políticas focalizadas); v) actuar sobre la deuda pública y la inserción mexicana en la internacionalización y vi) procurar la preservación y, en su caso, la recuperación de un medio ambiente donde realmente se pueda vivir.

En cuanto al primer aspecto, consideramos esencial rescatar las decisiones de política económica con criterios que no se reduzcan a la operación de los mercados (intercambio) y a políticas focalizadas de ataque a la pobreza, sino que incidan en la capacidad de revertir la insuficiencia de capital y empleos adecuados para generar la riqueza.

En los países pobres existe una insuficiente generación de riqueza, al menos de acuerdo con los criterios contables y de mercado, que le asignan un precio de decenas de miles de dólares a un vestido que haya usado una tarde la princesa Diana o la señora Martha y apenas unos cuantos pesos para una blusa tejida durante meses por una indígena zapoteca (así funciona la "racionalidad" del mercado). Sin embargo, que la riqueza sea creada no garantiza su adecuada distribución. Por esto, la segunda parte se referirá a políticas redistributivas.

El hecho de que los problemas fundamentales se den en la producción y la distribución no evita que existan graves fallas de mercado, no sólo de información y de adecuación de las características de la oferta con las necesidades de la demanda, sino por las estructuras oligopólicas predominantes. La tercera parte se referirá a este tipo de problemas.

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

Aunque el bajo consumo es consecuencia de las características productivas, distributivas y de mercado, no es posible esperar a que aquellas se corrijan para actuar en apoyo a la población marginada o para demandar derechos universales. La cuarta parte del artículo se refiere a las acciones de política social tanto focalizada como universal.

Mención aparte merece la problemática de la deuda y la política de inserción en la internacionalización económica, puesto que se han convertido en un condicionante central de las capacidades de desarrollo.

Por último, referiremos algunos aspectos ambientales que implican las condiciones básicas de supervivencia y son intrínsecas a las decisiones económicas.

1. Por una política de desarrollo inclusiva y cooperativa

1.1. El acceso a la tierra

El descuido estructural al sector agrícola, bajo el entendido de que modernidad es igual a industrialización, produjo una creciente heterogeneidad productiva y un mayor empobrecimiento rural, en especial en las regiones productoras de bienes *básicos* (qué paradójico que los productores de básicos sean los más abandonados). Luego, con la liberalización económica, los básicos se importan y sus antiguos productores se exportan en forma de braceros o se enfrentan a situaciones de extrema desventaja y precariedad en distintas grandes ciudades o como jornaleros agrícolas. El éxodo de trabajadores mexicanos a Estados Unidos (de entre 400 000 y 800 000 personas al año) refleja, indirectamente, una expulsión económica de tales trabajadores ante su imposibilidad de insertarse de manera competitiva en la lógica económica predominante. Con frecuencia se acusa al ejidatario de ser poco productivo, a pesar de haber sido el que alimentó a las ciudades de comida, materia prima y trabajadores para lograr, durante décadas (de los años treinta a inicios de los ochenta), un alto crecimiento económico. Estos ejidatarios "poco productivos" se juegan literalmente la vida atravesando la frontera con Esta-

Análisis Político

dos Unidos, y luego son los que envían las remesas de divisas para evitar que sus familiares caigan en la pobreza extrema. Tales divisas se constituyen después en una fuente fundamental para que el conjunto de la población, pero sobre todo para que las capas de mayores ingresos en México puedan adquirir los bienes importados. Los “poco productivos” son los que generan divisas para que algunos afortunados puedan adquirir, por ejemplo, automóviles de súper lujo.

Ante esto es indispensable apoyar el empleo de los ejidatarios y pequeños productores rurales, lo que implica evitar nuevos procesos de monopolización del campo, la subordinación de los campesinos a la especulación de tierras y el coyotaje con el comercio de productos agropecuarios. Igualmente, se requiere destinar una proporción de la inversión pública, del crédito bancario y de las capacidades profesionales de los universitarios (servicio social) al desarrollo del sector social de la producción rural. De hecho, no sólo por los campesinos sino por el conjunto del país, es necesario replantear la soberanía alimentaria como objetivo de la política agraria. Ello implicaría una menor migración a Estados Unidos y, por consiguiente, un menor flujo de dólares a México, pero permitiría garantizar nuestro sustento, así como la vida y la dignidad de cientos de miles de personas que actualmente emigran cada año.

1.2. Los determinantes del empleo y la acción sobre ellos

El empleo constituye la fuente primordial de ingreso para la gran mayoría de los seres humanos, así como la base fundamental de la generación de riqueza social. Si no hay empleo no hay producción, entonces no hay ingresos, no hay consumo, alimentación, educación, salud, vivienda ni demanda de bienes; tampoco hay inversión ni empleo, lo que cierra este círculo perverso.

En cuanto variable social, el empleo es un determinante central del bienestar de la población. En tanto que variable económica, el empleo es una variable dependiente, determinada por factores demográficos y económicos. Entre los primeros se cuenta el tamaño de la población, el crecimiento y

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

la proporción de trabajadores dentro de cada grupo socio-demográfico. Los determinantes económicos son esencialmente el nivel y la estructura de actividad económica y de la productividad. La actividad económica se encuentra en función del consumo interno de la población, del desarrollo de la inversión privada, del gasto público corriente y de inversión, así como de los niveles y características del sector externo de la economía (en especial exportaciones e importaciones). La productividad depende de las características tecnológicas y de organización del trabajo en nuestra economía, lo que a su vez está relacionado con la importancia que se le otorgue a la investigación y al desarrollo tecnológico y social, así como a las relaciones sociales de producción dentro y fuera de las empresas.

Lo anterior significa que no se genera empleo *per se*, sino para satisfacer una necesidad del mercado y/o de la sociedad. A partir de una tecnología dada, si aumenta la actividad económica tendrá que aumentar el empleo asociado a esa actividad. Si no aumenta, pero mejora la tecnología, la productividad se incrementará y el empleo disminuirá. Esto no significa que la productividad sólo genere desempleo, porque al aumentar ésta también se impulsa la producción. En otras palabras, la tecnología incide directamente en forma negativa e indirectamente en forma positiva sobre el empleo.

Dado lo anterior, ¿cómo aumentar el empleo? Necesariamente aumentando la actividad económica y los efectos indirectos de la productividad sobre esa misma actividad. ¿Cómo lograrlo? Allí es donde está el debate entre las diferentes corrientes de pensamiento.

La actividad económica se expresa en el Producto Interno Bruto (PIB), que a su vez se compone del consumo y la inversión privadas (de familias y empresas), el gasto público, y el saldo neto de exportaciones menos importaciones de productos finales. El crecimiento de cualquiera de estas variables (salvo importaciones) supone aumento en el empleo, pero también puede generar efectos nocivos.

El segundo mercado para las exportaciones mexicanas es Canadá. Sin embargo, por cada dólar que exportamos a ese país, importamos 1.6 dólares. Entre 1997 y 2004, la tasa de

Análisis Político

crecimiento de nuestras exportaciones fue de 6.3%, pero nuestras importaciones lo hicieron a un ritmo anual de más del doble: 15.3%. Sólo nuestro déficit con Canadá en 2004 fue de 2 036 millones de dólares (mdd), el equivalente a 82% del superávit de México con las regiones del mundo con las que tuvo excedente comercial, exceptuando Estados Unidos.

- Si aumenta el consumo privado en relación con el ingreso de las familias, disminuye la parte de ahorro e inversión, por lo cual aumenta la necesidad de endeudamiento, los riesgos de cartera vencida y de crisis, tanto bancaria como en el patrimonio de las familias (como en la crisis de 1994 y del Fobaproa). Una alternativa podría ser el apoyo al cambio en los patrones de consumo para favorecer la adquisición de bienes generados por los sectores productivos más depauperados o los mayores generadores de empleo (directa o indirectamente). Podría, por ejemplo, obligarse a los grandes establecimientos comerciales a dedicar un porcentaje de su superficie de venta (por ejemplo, 5%) a productos provenientes y directamente vendidos por las comunidades indígenas o las de mayor marginación en el país.
- El aumento de la inversión privada dependerá de tasas de interés accesibles que permitan promoverla, pero las bajas tasas de interés también traerían poco ahorro, por lo que los montos disponibles para inversión serían escasos. Además, con bajas tasas de interés, difícilmente se podrían captar recursos suficientes para pagar deudas. En una lógica especulativa se practica una política de altas tasas y de privatización de empresas públicas, lo que atrae nuevas inversiones que no necesariamente generan nuevos empleos. Otra práctica recurrente, predominante en México, es que el sistema financiero centre sus créditos en el financiamiento del consumo (tarjetas de crédito, automóviles de uso privado y casas habitación) y no en la inversión productiva. Una política alternativa podría ser la de regular el crédito bancario, obligando a fijar un porcentaje del monto del mismo para que sea otorgado en condiciones favorables para el deu-

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

dor (con un margen de intermediación bancaria que sólo cubra los costos administrativos), cuando se desarrollen actividades prioritarias, generadoras o sostenedoras de empleos, como la producción rural de bienes de consumo necesarios por parte de ejidatarios y minifundistas, las manufacturas de bienes protectores del medio ambiente, etc. Si la nación rescató a los bancos privados, quebrados por sus propias irregularidades y luego se vendieron a trasnacionales prácticamente sin que éstas pagaran impuestos por ello, al menos cabría regular la actividad bancaria para que efectivamente opere con criterios de beneficio social.

- El crecimiento del gasto público no parece viable en un esquema de política económica que prioriza el equilibrio fiscal y no ha podido acordar una reforma que permita la elevación en la captación de recursos públicos. En todo caso cabría preguntarse sobre las fuentes de financiamiento para el crecimiento de ese gasto público: ¿mayor deuda externa e interna?, ¿gasto inorgánico generador de inflación (echar a andar la maquinita de los billetes)?, ¿aumento de los impuestos? Me parece que el camino del gasto público mediante una nueva estructura fiscal puede ser un elemento importante para la generación de empleo. Ello implicaría una afectación a grandes grupos de poder, por lo que sólo podría aplicarse con una autoridad plenamente legitimada ante la sociedad. Para ello se requeriría enfrentar la corrupción y las conductas incoherentes que combinan el discurso de austeridad, defensa de la igualdad y el interés social, al tiempo que se fijan enormes ingresos, prestaciones y gastos de representación para los altos funcionarios.
- El crecimiento del empleo por la vía de las exportaciones (en especial maquiladoras), ha sido predominante en los últimos 30 años. Sin embargo, éste debe estudiarse junto con el efecto destructivo de puestos de trabajo que implica la desintegración de la planta productiva. Una empresa puede contar con más trabajadores que hace diez años, pero sustituyendo insumos nacionales por importados, por lo que puede haber una destrucción ne-

Análisis Político

ta de empleos. Considero que si bien la exportación es importante por ser generadora de divisas, ésta no puede basarse en un crecimiento desintegrado de la estructura económica interna.

- Por último, las importaciones tienden a ser mayores que las exportaciones y generan un saldo negativo en la creación de empleos. Además, dada la dependencia tecnológica y productiva de México, el crecimiento está estadísticamente correlacionado con un incremento en el déficit externo. Es decir, cada punto que crece el PIB se genera un aumento en el desequilibrio económico con el resto del mundo, mismo que se compensa con la entrada de capital extranjero, con frecuencia especulativo, lo que a su vez fragiliza cada vez más al conjunto de la economía.

La mejoría del empleo por medio de los efectos indirectos de la productividad ha sido prácticamente negada. Si bien se ha promovido el aumento de la productividad, esto ha sido por la vía de importación de tecnología y desintegración sectorial. La generación de empleo tendría que ir en sentido contrario: apoyando la generación de tecnología propia y adecuada a nuestras circunstancias (no sólo al mercado mundial, o más bien estadounidense) y el de la búsqueda de cadenas productivas intra e intersectoriales para la satisfacción de las necesidades internas, prioritariamente las esenciales. Esto implicaría tanto una protección especializada en sectores clave (como podrían ser la petroquímica, el impulso a la producción de manufacturas orientadas a la protección del medio ambiente o la producción de bienes de consumo básico, como el alimentario), como una política de inversión pública (que implica gasto) para el fomento de cadenas productivas.

El desarrollo de una estrategia alternativa necesitaría un arreglo institucional para tal fin. Podría plantearse la creación de un Instituto Nacional del Empleo, que procurara, entre diversos sectores sociales y de forma no corporativa, la definición de acciones prioritarias para impulsar las formas de consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas y

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

crecimiento de la productividad que sean más generadoras de empleo. Es decir, se trataría de que las decisiones de política económica se adoptaran considerando sus repercusiones en los niveles y calidad del empleo.

La búsqueda de acuerdos debería basarse en mecanismos de representación ciudadana legítimos, independientes y representativos, no delimitados por estructuras corporativas, y donde los objetivos de empleo y crecimiento no se sujeten a los compromisos preestablecidos con las esferas financieras, sino articulando políticas económicas y sociales que actúen de manera coordinada, para procurar un mayor acceso a la riqueza y una mayor realización de las capacidades productivas sociales. Además, tanto las empresas como los partidos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (osc) podrían participar en el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas de desarrollo, generadoras directas o indirectas de empleo.

1.3. ¿Y los salarios?

En México, más de 40% de la población ocupada no es asalariada. Así, la política salarial es fundamental como pago para el trabajo, pero no es la única forma de remuneración. Ello obliga a ser cuidadosos en las posibilidades de alternativas. Se requiere un incremento salarial, pero también que tal aumento no disminuya la proporción de trabajadores asalariados y que no afecte, en última instancia, a los grupos sociales depauperados, en condiciones mucho más complicadas que los propios asalariados.

En los países industrializados, la base organizacional de su crecimiento desde la década de los veinte hasta los setenta fue el fordismo, cuya trípode fue la aplicación del taylorismo (la administración *científica* de la producción), la producción masiva (líneas de producción) y el consumo de masas, bajo la regla de que los incrementos reales al salario fuesen proporcionales al aumento de la productividad de la empresa.

En gran parte de la industria mexicana se aplicaron el taylorismo y la línea de producción, pero la fijación de salarios rara vez coincidió con la evolución de la productividad del

Análisis Político

trabajo. Para la fijación de los salarios mínimos (SM), la regla básica hasta 1982 fue la de compensar la inflación acumulada desde el último aumento salarial, más una proporción decidida por cúpulas sindicales oficiales, empresariales y el propio gobierno. Desde la crisis de la deuda, la regla se redefinió, estableciéndose los aumentos salariales ya no en función de la inflación constatada en el periodo previo, sino de la esperada por el gobierno para el año correspondiente. Como la inflación constatada casi siempre era superior a la esperada, el poder de compra de los salarios se derrumbó entre 1982 y 1996. Desde entonces el ingreso corriente de los trabajadores ha aumentado marginalmente, a costa de un deterioro creciente en sus prestaciones.

Aunado a ello se ha presentado una creciente dispersión salarial: los salarios más altos (sueldos) han llegado a compensar y hasta rebasar la inflación, mientras que los bajos son los que más han soportado la disminución del poder de compra.

¿Qué se puede hacer? La demanda de resarcir inmediatamente la pérdida acumulada de los salarios es justa, pero puede resultar contraproducente. El hecho de que en México sólo una cuarta parte del ingreso nacional sea salarial, mientras que en los países ricos llega a ser 80%, no significa que aquí el remanente refleje ganancias empresariales. El ingreso nacional (remuneración de asalariados más excedente bruto de explotación) es muy bajo no sólo por los deteriorados salarios, sino porque en él se contabilizan los ingresos de los ejidatarios, productores comunales, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, microempresarios, etc. Si la mitad de la población ocupada vive de ingresos no salariales, no se puede pedir que el excedente bruto de explotación se reduzca a 20% como en Suecia.

Si bien en muchas grandes empresas los salarios no representan más que una pequeña parte de sus costos de producción, lo que significa grandes ganancias respecto a los salarios, en la mayoría de las micro, pequeñas y medianas, así como en el gobierno, donde laboran en conjunto la mayor parte de los trabajadores, los salarios representan una proporción muy importante de sus costos. Si muchas micro, pe-

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

queñas y medianas empresas se encuentran en grandes dificultades frente a las crisis y a la competencia internacional, ¿qué les ocurriría si sus salarios aumentaran al doble o al triple? Si queremos un aumento significativo para los trabajadores de bajos ingresos en el sector público (maestros, médicos, enfermeras, policías, empleados) ¿de dónde va salir el dinero?, ¿de contratación de deuda, de inflación o de más impuestos? Pedir que el gobierno deje de gastar en otras áreas implicaría discutir el conjunto de la organización del presupuesto público. Es lógico pedir que tales gastos se orienten hacia el aumento salarial, pero ¿por qué no a los ejidatarios, a programas de salud, a la lucha contra la extrema pobreza, la protección ecológica, la vivienda popular, etc.? En suma, la respuesta del financiamiento para los aumentos salariales no es fácil ni es sólo cuestión de justicia, sino de evaluar las condiciones reales en las que nos encontramos y de una discusión amplia sobre los criterios presupuestales, especialmente públicos.

Un aumento salarial basado en el incremento de la productividad de la propia empresa podría implicar un mayor desplazamiento de los trabajadores calificados hacia las grandes empresas y una aun mayor vulnerabilidad de las micro, pequeñas y medianas. Por otra parte, la forma misma de medir la productividad para el conjunto de la economía representa un problema: por ejemplo, el precio del barril de petróleo ha aumentado enormemente ¿eso significa que la productividad por trabajador de Pemex ha subido en esa misma proporción? Es obvio que no.

Por el contrario, si medimos la productividad en volumen y no en precio, difícilmente podremos comparar la de bienes y servicios cualitativamente diferentes: ¿cómo comparar la evolución de la productividad de un diputado con la de una trabajadora de la industria maquiladora?

Por ello es menester plantear una alternativa de política salarial que permita resarcir, de manera simultánea, el poder de compra de los asalariados, no inhibir la generación de empleo y enfrentar el control oligopólico de la economía. Esta política salarial tomaría como eje de decisión la transferencia de recursos de los sectores más económicamente poderosos

Análisis Político

a los menos. Esta solución traería rechazos políticos, pero toda alternativa implica afectar intereses, pues de lo contrario ya se hubiera tomado.

Cuatro criterios podrían definir la política salarial: i) la inflación; ii) la productividad, considerada como PIB por trabajador en una rama, región o tamaño de establecimiento específico, iii) la productividad propia de la empresa y iv) la definición de un criterio institucional para la recuperación salarial gradual, constante y estable.

Adicionalmente a los beneficios en favor de los trabajadores de regiones depauperadas, de los de micro y pequeñas empresas, de los sectores rezagados y de los trabajadores con menos ingresos, esta estructura permitiría impulsar la "formalización del sector informal" y la descentralización, al volverse atractiva para los trabajadores informales la regulación de sus actividades y para las regiones más abandonadas la instalación de empresas, debido a la transferencia de recursos de los sectores, regiones y empresas más poderosos.

1.4. La normatividad laboral

La actual legislación está pensada para un mundo fordista y corporativizado. Ni el mundo ni el México de hoy son los mismos. El debate no está centrado en modificar o no la ley laboral, sino en qué sentido modificarla. Plantear la flexibilización del trabajo, destruyendo prestaciones y condiciones de estabilidad, implicaría una transformación regresiva que ni siquiera garantizaría una competitividad laboral en el corto plazo (las ventajas competitivas dinámicas se basan en la calidad y la innovación, no en los bajos costos laborales). Pero no por ello puede mantenerse un esquema rígido, válido sólo para controlar al trabajador y amenazar a las empresas.

En efecto, es indispensable desmembrar las bases corporativas de diversas centrales sindicales y facilitar la libre afiliación del trabajador, su involucramiento directo en la vida de la empresa y el establecimiento de esquemas para el desarrollo de mercados internos de trabajo (la posibilidad real de realización de carrera al interior de ellas), que generen ventajas dinámicas por el creciente conocimiento de los tra-

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

bajadores y no por el desarrollo de habilidades técnicas singulares y bajos ingresos. En otras palabras, la flexibilización del mercado de trabajo debería contener la flexibilización del capital en favor del trabajador y no sólo del trabajador en favor del capital.

El sindicato debe ser una estructura de representación real, continuamente democrática y libre a su interior (lo que implica el voto libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir sus dirigencias), con la posibilidad de la pluralidad de opiniones y con una capacitación permanente sobre la situación de la empresa, del sector, de la región en que se ubique y de sus debilidades y fortalezas.

1.5. ¿Se puede proteger a los desempleados?

En las circunstancias actuales un seguro de desempleo podría parecer descabellado en términos de competitividad salarial, y entrañaría riesgos enormes, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto podría evitarse si el fondo financiero del que proviniera el seguro no fuese generado por la sola empresa en la que el trabajador labore, sino mediante una socialización del costo entre el Estado, empresas y trabajadores, bajo los siguientes criterios:

- En conjunto, las cuotas serían una proporción del ingreso de las empresas correspondiente a la tasa de desempleo del trimestre anterior. Éstas aumentarían al hacerlo el desempleo, lo que desincentivaría el despido de trabajadores. El pago podría ponderar lo siguiente:
 - El tipo de actividad realizada por la empresa. Sus pagos disminuirían conforme aumentara la utilidad social de la actividad desarrollada (lo que presupone una política industrial).
 - La cantidad de empleos generados por unidad de capital.
 - Su nivel de integración nacional (proporción nacional de su valor agregado).

Análisis Político

- La proporción de los salarios en los ingresos de la empresa.
- Las utilidades no reinvertidas productivamente en el año previo. A mayores utilidades no reinvertidas, mayor contribución.
- Por parte de los trabajadores, las cuotas serían crecientes según el porcentaje de sus ingresos netos, conforme aumentaran éstos en múltiplos de salario mínimo (SM). Los perceptores de menos de dos SM estarían exentos, y a partir de esa base se establecería la escala en la contribución.
- Los beneficios se limitarían temporalmente y se condicionarían a que el desempleado se inscribiera a una bolsa de trabajo y demostrara estar buscando empleo. El beneficio percibido sería proporcionalmente decreciente al monto de ingresos registrado antes de haber perdido su empleo. Por ejemplo, para los trabajadores con remuneraciones de hasta dos SM, se pagaría 100% de su salario durante dos meses. En caso de seguir desempleados, se les pagaría 80% en los dos meses siguientes, 60% en los dos ulteriores, y así sucesivamente. Lo anterior garantiza el beneficio del seguro durante diez meses. En cambio, para los que reciban más de 20 SM, el seguro podría cubrir sólo 20% del salario los primeros dos meses. El límite superior para beneficiarse del seguro podría fijarse en 25 SM.

Si existiera superávit en el seguro de desempleo, éste se utilizaría para crear un fondo de ahorro en caso de contingencia e impulsar proyectos de generación de empleo en espacios locales y regionales marginados, donde las relaciones de trabajo asalariado sean nulas o poco significativas. Si existiera déficit, el Estado efectuaría un subsidio, con cargo a las partidas que impliquen mayores gastos compresibles, tales como viáticos, pasajes y gastos de representación de funcionarios públicos (no se trata de que se eviten los viajes, sino la ostentación).

1.6. Política especial hacia jornaleros agrícolas

En términos generales, estos trabajadores son contratados verbalmente, no gozan de prestaciones y se encuentran remunerados en niveles exiguos. Dada la existencia de cacicazgos locales, muchos se contratan en condiciones infrahumanas. Por ello, es urgente el establecimiento de mecanismos de inspección social sobre las condiciones de vida y de trabajo de este grupo, que representa 7% del total de la ocupación nacional. En especial se deben impulsar tareas específicas, desarrolladas entre los empleadores y los diversos niveles de gobierno, para favorecer sus condiciones de viaje, alojamiento, alimentación, higiene, salud y educación.

Otra forma de promoción al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los jornaleros podría ser el establecimiento de una norma similar a la ISO-9000 (en nivel internacional), pero que en vez de certificar la calidad del producto certifique que éste haya sido elaborado respetando condiciones de trabajo y pago adecuados para los trabajadores que intervinieron en su producción (iniciativa *Comercio Justo*). Este esquema ya se ha iniciado en algunos productos de Estados Unidos y Europa, y podría ser un mecanismo de promoción de productos mexicanos, tanto en nivel nacional como internacional, cuando se cumplan los derechos de los trabajadores, así como un castigo para los productores que denigren sus condiciones de vida. Dado el contexto en que se encuentran y el tipo de productos que elaboran, los jornaleros agrícolas podrían resultar beneficiados de este esquema.

1.7. Favorecer la inserción productiva y la valoración del trabajo de las comunidades con mayores niveles de marginación, especialmente indígenas

Las grandes cadenas de distribución privadas, tales como supermercados y grandes almacenes, podrían disponer de un porcentaje de su espacio comercial (por ejemplo, 5%) para la venta directa de los productos campesinos e indígenas, por parte de sus productores. En caso de que participen intermediarios, se deberá garantizar que al menos 50% del precio de

Análisis Político

venta final sea remitido a los productores directos. En nivel internacional, se podrían sustituir algunos gastos del servicio exterior mexicano, en términos de bienes inmuebles y gastos diplomáticos, por el establecimiento de servicios de comercialización internacional y puntos de venta directos de artesanías. Igualmente, podrían fortalecerse las redes de intercambio de bienes y servicios al interior de las comunidades, a fin de crear focos dinámicos de integración productiva local.

Ligado con la política ambiental, se podrían establecer apoyos para empleos en protección ecológica, agricultura orgánica, ecoturismo y, en general, actividades de ecodesarrollo dirigidas por las mismas comunidades, pero con apoyo técnico, financiero y de capacitación por parte de instituciones públicas y OSC. El objetivo sería el aprovechamiento de los recursos naturales, históricos y culturales de las comunidades en beneficio de ellas mismas, y evitando la intromisión de empresas que deterioren el medio ambiente y destruyan las riquezas culturales e históricas de las regiones.

1.8. El recurso al crédito y la disponibilidad de capital

Una posibilidad de financiamiento adecuada a nuestras circunstancias podría ser el ejemplo del proyecto europeo *Eureka*. Frente a la desproporción de recursos financieros para investigación y desarrollo ante Estados Unidos, los países europeos diseñaron un esquema para lanzar a subasta internacional —al interior de los países miembros— proyectos tecnológicos financiados parcialmente por cada participante, cuyas utilidades se distribuirían de manera proporcional a la participación en los costos. De esta forma se crearían proyectos rentables que un país aislado no alcanzaría a financiar.

En el caso de América Latina, se podrían desarrollar proyectos de desarrollo propios a las necesidades regionales y subregionales, en áreas tales como la biotecnología, la producción de bienes de capital para la producción de bienes de consumo necesario, la generación de insumos y la comercialización intrarregional, etc. Ello reduciría los costos de investigación por proyecto-país, abriría mercados a tecnología lo-

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

cal y, sobre todo, favorecería la producción en función de los recursos regionales.

En materia de financiamiento privado, la restricción del crédito tanto de la banca tradicional (o el crédito a tasas de interés prohibitivas) como de las instituciones públicas, provoca una enorme dificultad de la mayor parte de las empresas para acceder a los recursos que les permitan elevar, de manera prolongada, sus capacidades productivas, por lo que hay que recuperar los esquemas de financiamiento a la inversión productiva.

En cuanto al capital, también se requiere la orientación de créditos preferenciales a los campesinos, así como emplear en su beneficio parte de la recaudación de algún impuesto especial sobre la renta y compra-venta de tierras agrícolas y ganaderas.

2. Por una política redistributiva del ingreso

La generación de riqueza es una condición necesaria pero insuficiente para el bienestar social. Para acarrear efectos virtuosos debe distribuirse equitativamente. Por ello, tienen que establecerse políticas explícitas distributivas del ingreso. Aquí juegan un papel especial las políticas monetaria, crediticia y fiscal, así como la descentralización en el uso de los recursos. En su orientación se precisa desincentivar el consumo suntuario, las ganancias especulativas y rentistas, así como el centralismo económico-político.

Lo anterior no es posible bajo una lógica de libre mercado, desde el momento en que los competidores “vencedores” adquieren ventajas sobre los “perdedores” para los periodos subsecuentes. Revertir el proceso concentrador implica la participación de instancias externas al mercado, entre las que sobresale el Estado, pero también pueden figurar sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, osc, iglesias, etcétera.

2.1. Una política monetaria progresiva

Más allá del control de la base monetaria, esta política implicaría el control del circulante en los mercados de bonos y divi-

Análisis Político

sas, para orientar los recursos financieros hacia las actividades productivas más provechosas en términos de bienestar social (impuesto Tobin). En contraparte, se podría favorecer la emisión de circulante local, restringido al uso comunitario de cooperativas de producción-consumo.

Para ello se requeriría que en las decisiones (consejo de administración) del Banco de México participasen no sólo los intereses del sector financiero, sino también los de los sectores agropecuario, industrial y de servicios, priorizando la representación de micro, pequeñas y medianas empresas.

2.2. Una política crediticia selectiva

Ésta podría facilitar el acceso a recursos por parte de los productores cuyas actividades impliquen mayores beneficios sociales y no sólo hacia aquellos que gocen de mayores recursos económicos o que representen mayor rentabilidad en las esferas bancarias/financieras. Cabría, por ejemplo, considerar la asignación de recursos con bases regionales, de tal forma que se prioricen las actividades productivas en aquellas zonas que más sufran la incidencia de la pobreza. Igualmente, se podrían establecer márgenes diferenciados de intermediación bancaria, según el tipo de créditos y fijar proporciones mínimas obligatorias de los créditos bancarios para actividades de interés social y desarrollo económico. En relación con los márgenes de intermediación, a partir de una determinada tasa de interés pasiva promedio (la que pagan los bancos a los ahorradores), los bancos deberían aplicar un margen que no exceda el que se aplique por parte de los principales socios comerciales de México. Por el contrario, los préstamos para los consumos de lujo (por ejemplo, vivienda residencial o automóviles nuevos) podrían gravarse con una sobretasa que podría destinarse, por ejemplo, a la construcción de viviendas de interés social y a inversión en transporte público.

Se podría dar una prioridad especial a la asociación entre trabajadores por cuenta propia y microempresas en actividades de interés social. A partir de las asociaciones, se podrían impulsar facilidades técnicas y financieras, vía Nacional Financiera (Nafin). Igualmente, se podría fijar un porcentaje de los crédi-

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

tos de la banca privada, en condiciones preferenciales, a estos establecimientos. El criterio de asignación ponderaría más la viabilidad social del proyecto que la disponibilidad de capital.

2.3. Por una reforma fiscal redistributiva

Para financiar el desarrollo es indispensable una reforma fiscal, pero sus contenidos no están claros ni consensados. Cualquier propuesta alternativa se enfrenta al obstáculo del financiamiento. Obtenerlo de los grandes capitales implica su descontento y posible reacción de defensa. Ello presupone grandes riesgos para efectuar una política alternativa, tanto de inestabilidad política como de efectos sociales contraproducentes. Sin embargo, mantener la lógica actual presupone sostener las tendencias de inestabilidad, vulnerabilidad y concentración de la riqueza que nos caracterizan. Ninguna sociedad desarrollada tiene niveles ni remotamente cercanos a los de la concentración mexicana de la riqueza y sí, en cambio, cuenta con niveles mucho más significativos de captación tributaria. En otras palabras, pese a las dificultades que entrañaría una reforma fiscal redistributiva, considero que no existe más alternativa que abordarla.

En principio, se requeriría gravar mayormente el consumo suntuario, dañino a la salud (individual o colectiva, asociada con el medio ambiente) o que impacte de manera negativa la articulación productiva y reducir la carga fiscal para la inversión con alta rentabilidad social. Asimismo, es necesario reponderar los impuestos al ingreso sobre aquellos al consumo, de tal forma que la captación tenga un carácter progresivo en función del poder económico detentado.

A fin de frenar corruptelas en el uso de los fondos públicos podría establecerse un esquema de "impuestos de asignación directa" que reduzca la centralización gubernamental. De esta forma quedaría claro el destino de los impuestos. La mecánica de este esquema podría ejemplificarse en:

- Revisar el secreto bancario para localizar el enriquecimiento inexplicable de funcionarios públicos y, en el ca-

Análisis Político

so de demostrarse fraudes, incautarlos en favor de la nación.

- Procurar la austeridad presupuestal en las altas esferas del sector público. Podrían delimitarse en múltiplos del salario mínimo los ingresos, prestaciones y gastos de representación de los funcionarios, con el fin de que queden atados a la evolución del nivel de vida de la población en general y se transparente su monto.
- Fortalecer las labores de vigilancia del Congreso de la Unión y del Poder Judicial, pero con una supervisión abierta a la sociedad y sus organizaciones. La corrupción difícilmente desaparecerá, pero la impunidad sí puede enfrentarse.
- Establecer un impuesto especial para las personas que posean grandes fortunas (ingresos mensuales superiores a 100 SM o a las familias nucleares que dispongan de activos no productivos —como residencias— superiores a 10 000 SM mensuales). Con esto podría financiarse directamente la política social focalizada en las localidades de mayor marginación.
- Utilizar una parte significativa del impuesto predial de las zonas residenciales de lujo para financiar la dotación de servicios básicos en zonas marginadas del propio municipio.
- Establecer un impuesto especial sobre herencias, trasladable de manera directa al financiamiento de becas de estudio y manutención para niños en condiciones de pobreza.
- Establecer impuestos especiales a la especulación financiera, de tierras, a la transacción de divisas, a las grandes fortunas y a sueldos especialmente elevados. El pago de este impuesto tipo Tobin, sobre divisas y bonos, podría depositarse en cuentas bancarias en favor de los ayuntamientos, para fomentar directamente el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura básica y fortalecimiento de política industrial para micro, pequeñas y medianas empresas en regiones industrialmente rezagadas. Para ello se podría destinar el monto captado para financiar el desarrollo económico productivo.

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

- A pesar de que pueda implicar un costo muy importante en cuanto a captación de capital especulativo, la aplicación de la Tobin Tax (salvo en el caso de la transferencia unilateral de recursos a México por parte de los trabajadores emigrantes al extranjero) permitirá generar importantísimos recursos. A fin de evitar un éxodo de esta inversión, podría existir la opción de disminuir el pago del impuesto por el compromiso de mantener, en un periodo amplio (por ejemplo dos años), el monto de la transacción efectuada dentro del país. Esquemas de regulación al mercado especulativo han sido practicados en Canadá, Israel, Brasil y Chile, sólo por citar algunos ejemplos

2.4 Política activa de descentralización

Ésta supone no sólo la transferencia de recursos federales a estados o municipios, sino la participación activa de las organizaciones sociales, en nivel local y regional, en las decisiones sobre su asignación y uso.

3. Por la presencia de mercados no perniciosos

El problema de los monopolios y oligopolios no se resuelve sólo con el establecimiento de una normatividad, sino con que ésta pueda ser aplicada de manera efectiva. Para ello, se requiere un poder público fuerte pero no autoritario, constantemente intervenido por la sociedad civil para enfrentar burocratismos y corruptelas. Ello requeriría el control social de sectores clave de la economía, por los que transiten las empresas oligopólicas. Ante una empresa con un enorme poder trasnacional, se requiere un equivalente interno, representado en monopolios naturales del Estado, que no hay que destruir, sino transparentar y democratizar. El problema de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es que sean públicas, sino que no se discuten, abiertamente, su organización, políticas, financiamiento y presupuestación.

Análisis Político

Para actuar sobre los mercados en favor de su eficiencia y beneficio social, podría impulsarse una política integral atendiendo a actores diversos.

3.1. Articulación entre las políticas industrial y financiera

Para que el sector financiero cumpla con sus objetivos de facilitar la capitalización de las empresas productivas y apoyar el crecimiento económico, se podrían regular las primeras y promover las segundas mediante acciones como las siguientes:

- contratación, capacitación y educación de los trabajadores y sus familias,
- apoyo a la integración de redes y cadenas productivas (*clusters*), compra de insumos a micro, pequeñas y medianas empresas (efectos multiplicadores),
- investigación y desarrollo para el mercado, conforme a la disponibilidad de factores y necesidades sociales nacionales y locales,
- fomento a cambios organizacionales para involucrar mayormente a los trabajadores en la toma de decisiones técnicas y administrativas de las empresas,
- fondos de ahorro y contingencia en favor de los trabajadores,
- Inversión en equipo anticontaminante.

3.2. Intermediación y abasto

El esquema básico para enfrentar el coyotaje y el apoyo a los campesinos estuvo dado por el espíritu original del art. 27 constitucional y el establecimiento de un puente entre la producción campesina y el consumo de bienes del campo por parte de los consumidores populares urbanos. Dicho puente fue la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Resultaría importante la regeneración de instancias como ésta, pero con una amplia vigilancia de diversos sectores sociales y fuerzas políticas, con el fin de evitar usos clientelares y corruptos en que pudiese caer dicha instancia.

3.3. Microcrédito y mercados financieros paralelos

Las cajas populares son un sistema tradicionalmente empleado por comunidades donde no operan los grandes bancos y que se ha extendido hacia las regiones que cuentan con ellos. En la actualidad existe una crisis en este sistema por la falta de regulación, la inexistencia de un sistema legal de protección a sus ahorradores (a diferencia de los bancos) y la corrupción y la ligereza con que se han manejado algunos de ellos. Sin embargo, el ahorro popular en el ámbito local permitiría precisamente contar con capacidades para el desarrollo de proyectos productivos en ese mismo nivel.

Para que ello sea factible se requiere un proceso de regulación de las cajas populares, así como de la relación y la presencia con los grandes bancos. Igualmente, se necesita un control sobre sus diferenciales entre las tasas de interés activas (las que cobran al deudor) y las pasivas (las que pagan al ahorrador). Se necesita protección para los ahorradores y una vigilancia sobre la relación de créditos respecto a depósitos, para evitar riesgos demasiado altos. Huelga señalar la importancia de supervisar y vigilar que no se conviertan en mecanismos de lavado de dinero.

Lo anterior permitiría desarrollar micromercados en comunidades marginadas y procurar el acceso a tecnologías mejores y sustentables, a la demanda de las regiones no marginadas y, en algunos casos, a su participación en mercados internacionales (como podría ser el caso de las artesanías).

4. Por la complementariedad en la educación de políticas universales y focalizadas

Las políticas universales y focalizadas siempre han coexistido, pero ante el aumento de la pobreza y la reducción de los recursos públicos disponibles se ha generado una dicotomía entre ambas. Las universales lo son cada vez menos y las focalizadas enfrentan la pobreza pero no el empobrecimiento. Lo primero puede ejemplificarse con el derecho a la salud, establecido constitucionalmente, pero con un nivel inacepta-

Análisis Político

ble de cobertura, mientras las facultades de medicina, por falta de recursos, restringen cada vez más la formación de médicos.

Para articular la educación universal, aun en el nivel universitario superior y la atención a necesidades primarias, podría crearse un extenso servicio social universitario que implique una recuperación social de los costos de la educación superior. Se enviarían brigadas interdisciplinarias de pasantes a las localidades pertenecientes a los municipios con niveles de marginación medios, altos y muy altos. El objetivo sería ofrecer no sólo servicios básicos en los planos médico, odontológico, de alfabetización y educación básica para adultos, sino también capacitación en contabilidad y administración básica a las organizaciones comunitarias y —en su caso— a las autoridades locales. Se podría hacer análisis de suelos, vegetación y medios orográfico e hidrográfico por parte de agrónomos, biólogos, químicos y físicos para sugerir mejoramientos en los usos de suelos agrícolas; capacitar a la población en la cría de pequeñas especies por parte de veterinarios; apoyar la realización de pequeñas obras de infraestructura hidráulica y de caminos por parte de ingenieros; contribuir a la resolución de problemas jurídicos de los pobladores; apoyar a los maestros rurales por parte de los estudiantes de diversas disciplinas; analizar la problemática de la comunidad por parte de sociólogos, economistas y antropólogos sociales; apoyar la gestión pública local por parte de administradores públicos; diseñar esquemas de apoyo a problemáticas individuales o familiares específicas por parte de trabajadores sociales; fomentar actividades culturales por parte de los pasantes en carreras artísticas; sistematizar el trabajo de los equipos mediante informáticos y actuarios, etc. En fin, de existir un lazo de unión con el equipo y personal académico de las universidades, difícilmente podría encontrarse alguna actividad profesional que no pueda ser utilizada de manera directa o indirecta en beneficio de las comunidades marginadas. Las brigadas interdisciplinarias podrían ser dirigidas por profesores o investigadores comisionados para tal tarea.

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

El financiamiento podría ser multipartita, donde las universidades apoyen con el equipo administrativo y de laboratorio necesario para las investigaciones; las comunidades y los gobiernos locales faciliten el alojamiento de los pobladores, y el gobierno federal proporcione a los estudiantes una beca de manutención (que bien pudiera salir del impuesto especial sobre herencias millonarias).

Las actividades resultantes implicarían la movilización productiva de amplios contingentes, con sus consiguientes efectos sobre el empleo y la elevación del nivel de vida de las comunidades. Para ser efectiva, estas medidas deberán favorecer la interacción al interior y entre comunidades, a fin de desarrollar sus redes de intercambio y una mejor inserción común en los mercados externos a ellas.

Igualmente, cabría incentivar, en especial, la investigación y el desarrollo dirigidos a nuestras propias circunstancias, recursos y necesidades, para atender adecuadamente a las regiones beneficiarias.

5. Por una nueva inserción mexicana en la internacionalización económica

En la internacionalización se han globalizado los mercados financieros y el acceso al ciberespacio; el comercio de mercancías se ha regionalizado en grandes bloques y el dinero del mundo se ha focalizado en algunos centros de poder y paraísos financieros. En cambio, el mercado de trabajo se encuentra reprimido en su movilidad con muros de la tortilla que han cobrado más víctimas que el de Berlín, y con el auge de la xenofobia frente a los trabajadores migrantes.

En el plano del comercio internacional México no está *globalizado*, sino circunscrito a la esfera norteamericana. Casi 90% de su comercio es con Estados Unidos y los resultados de la apertura económica con él es, al menos, discutible. La economía mexicana tiende continuamente al estrangulamiento externo por déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, mientras que la pobreza, la concentración del ingreso y la heterogeneidad productiva siguen en aumento.

Análisis Político

Por lo anterior, resultaría conveniente replantear, en algunos aspectos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): cabría precisar que el trato “nacional” a los productos norteamericanos especifique reglas de origen no sólo regional, sino nacional, a fin de que progresivamente se incremente el contenido nacional de las exportaciones mexicanas, en especial las maquiladoras. En este caso se podría demandar un incremento progresivo en el grado de integración. Por lo que respecta a las no maquiladoras, se podría demandar un nivel básico de integración nacional de 25%, y que éste sea creciente en la misma proporción que el maquilador, hasta llegar a 40%. En el sector agrícola sería recomendable renegociar el maíz, para favorecer a los productores nacionales que no dispongan de un determinado nivel de equipamiento e infraestructura. Tales modificaciones promoverían una búsqueda creciente de integración del aparato productivo y, así, la reinversión productiva y la generación de empleos.

En las negociaciones internacionales se podría promover el respeto a la biodiversidad mundial y al reconocimiento del patrimonio universal de aquellos avances tecnológicos empleados para la satisfacción de necesidades alimentarias y para la atención de males endémicos.

Se requiere promover el acuerdo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que al menos 0.7% del PIB de los países ricos se destine a aportaciones para el desarrollo de los del Sur. Actualmente sólo los países escandinavos y Holanda se aproximan a tal proporción.

Se debe promover la restitución del poder de los organismos de la ONU en que las decisiones se toman por voto unitario por país, en detrimento de aquellas instituciones donde las decisiones son por “voto monetario”, en función del poder financiero de un país sobre la institución (tal es el caso de las instituciones financieras internacionales).

6. Por una política económica sustentable

Finalmente, no contamos más que con este planeta para vivir. Es prioritario respaldar los esfuerzos de las organizaciones que trabajan en pro de la sustentabilidad, que luchan

Políticas alternativas: intuiciones y viabilidades

para que la introducción de innovaciones tecnológicas sólo se efectúe cuando demuestren que no destruyen la biodiversidad o el equilibrio ecológico (discusión central en el caso de los transgénicos); que efectivamente la sociedad civil cuente con el poder de imponer criterios éticos al manejo de los genomas, en especial el humano; que se logre una transferencia internacional de recursos, disminuyendo los gastos militares y acrecentando los de reconstitución ecológica.

Para el caso específico de México, es importante desechar la "ventaja comparativa" que representa el que salga más barato contaminar aquí, que en el territorio de los socios comerciales. Se requiere una reglamentación estricta al respecto, y el reconocimiento de la vigilancia por parte de OSC nacionales e internacionales.

Es preciso la descentralización de las actividades económicas, no sólo en el ámbito nacional, sino estatal y municipal, donde los niveles de centralismo llegan a ser aun proporcionalmente mayores.

Es urgente la atención al problema del agua, por lo que se requiere la vigilancia estricta ante las industrias que puedan contaminar ríos, lagos y lagunas. Se debe promover el aprovechamiento de aguas pluviales, el aumento en prioridad de las obras de reparación de las redes de agua potable y de drenaje de las ciudades, la introducción intensiva de tecnologías ahorradoras de agua, etcétera.

En materia de calidad del aire, de la tierra y de la contaminación acústica se requieren acciones similares. La utilización generalizada de las prácticas de roza, tumba y quema en las actividades agropecuarias generan enormes efectos perversos en el mediano, cuando no en el corto plazo, debido a la generación de incendios. Es indispensable la introducción de tecnologías de reciclado que, al igual que en la caso de los desechos sólidos, eviten la mayor degradación del medio ambiente.

Para lograr lo anterior se requieren grandes recursos que involucren el plano internacional. La contaminación no respeta fronteras, el hoyo en la capa de ozono no sólo afecta a uno u otro país.


Análisis Político

7. Conclusión

Lo expuesto son sólo ideas y percepciones, además de algunas tesis ampliamente trabajadas en el nivel internacional como el impuesto Tobin o la iniciativa sobre comercio justo. Sin embargo, el hecho de que pueda expresarse y debatirse una serie de planteamientos, como éstos, puede permitir mejorarlos, desecharlos y tal vez validar alguno.

El atrevimiento de plantear propuestas sin suficiente fundamento tal vez no sea correcto, pero no podemos esperar a tener todos los fundamentos para manifestar nuestra visión no sólo de lo que queremos, sino de cómo creemos que es posible alcanzarlo.

Finalmente, cabe referir a J. M. Keynes (1984), cuando en 1936 concluye su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, defendiendo la validez de exponer ideas:

Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, sino después de un intervalo; porque en el campo de la filosofía económica y política no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de los veinticinco o treinta años de edad, de manera que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aun los agitadores, aplican a los conocimientos actuales, no serán las más novedosas. Pero tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados los que presentan peligros, tanto para mal como para bien. 

Bibliografía

Keynes, J. M. *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, México, FCE, 1984.

Román Morales, Luis Ignacio. "Algunas intuiciones sobre el diseño de políticas alternativas", en *Revista Renglones*, Guadalajara, ITESO, núm. 48, 2003.